



Comunidad de
Madrid

Consejería
de Gobernación

59/1776

X

**DISCURSO DEL PRESIDENTE
DE LA COMUNIDAD DE MADRID ANTE
LA III ASAMBLEA DE LA FEDERACION
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS
Y PROVINCIAS**

(29-XI-1985)



En el acto inaugural de la III Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Presidente de la Comunidad de Madrid pronunció unas palabras, a cuya edición y divulgación entre todos los Ayuntamientos de la Región de Madrid se procede por considerarse que contienen la formulación del modelo de relaciones entre la Comunidad de Madrid y los Municipios que la integran. El claro posicionamiento municipalista del discurso del Presidente confirma las líneas de actuaciones y de trabajo de esta Consejería de Gobernación con los Ayuntamientos

Quisiera, en primer lugar, expresarles la más cordial bienvenida a la Comunidad de Madrid. Una Comunidad que es, por derecho propio, de todos ustedes.

Nos sentimos honrados de que hayan escogido a esta Comunidad como sede de esta Tercera Asamblea y les deseamos un trabajo fructífero.

Los momentos actuales obligan a la reflexión y a la responsabilidad. Y estamos seguros de que ustedes poseen ambas cualidades.

Yo quisiera, si ustedes lo permiten, adoptar también algunas reflexiones sobre ciertos asuntos que habrán de discutir.

Hay valores que los españoles hemos demostrado apreciar más que cualquier otro. Esos valores son la democracia y la libertad.

Democracia es participación, democracia es afirmar y desarrollar las instituciones desde la base del tejido social y eso es lo que han estado haciendo los Ayuntamientos desde 1979.

Nuestra labor ha sido la de acercar al ciudadano su realidad y convertirlo en un actor de la evolución de esa realidad. Y ésta no ha sido tarea fácil en una España que había olvidado lo que era la democracia. Menos aún en un período de crisis tan grave como la que hemos vivido y vivimos. Crisis que hubiera resultado insoportable en un Estado vertical y autoritario como el existente aquí hace tan sólo diez años.

Por eso decimos con toda claridad y con toda convicción que desarrollar este Estado de las Autonomías es consolidar y desarrollar la democracia.

Desarrollar el proceso de las Autonomías locales o regionales requiere, por tanto, dotar a las instituciones de los recursos económicos y técnicos que les permitan desenvolverse adecuadamente. Que les permitan resolver los problemas que a diario detectan en su ámbito. Es preciso tener en cuenta que, en estos pocos años, los Ayuntamientos democráticos han dado muestras, en general, de una eficacia muy estimable a la hora de resolver los más variados problemas ciudadanos.

El artículo 2º de la Constitución "reconoce y garantiza el derecho a la Autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas".

El artículo 140 de la Constitución "garantiza la Autonomía de los Municipios" y les acuerda una personalidad jurídica plena, que respalda el artículo 142 al establecer que "las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones respectivas".

De acuerdo al artículo 137 de la Constitución, "el Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses".

Este repaso elemental de la Constitución de 1978 sirve para recordar —porque es útil hacerlo en el momento actual, tan marcado por la aparición de la nueva Ley Básica de Régimen Local y por la discusión del financiamiento de las Autonomías y de los Ayuntamientos— que España surge y se consolida democráticamente como el Estado de las Autonomías.

Y esto es necesario asumirlo en su integridad, como ya lo previó nuestra Carta Magna. Así lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional, el cual, en Sentencia de 2 de febrero de 1981, afirma:

"Ante todo resulta claro que la Autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el artículo 2º de la Constitución."

En esa misma línea esta Sentencia del alto Tribunal aclara algunos extremos que, a veces, se confunden interesadamente. Cito de nuevo textualmente:

"Es la Ley la que concreta el principio de autonomía de cada tipo de entes, de acuerdo con la Constitución. Y debe de hacerse notar que la misma contempla la necesidad —como consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la Nación— de que el Estado quede colocado en una posición de superioridad tal y como establecen diversos preceptos de la Constitución, tanto en relación a las Comunidades Autónomas concebidas como entes dotados de autonomía cualitativamente superior a la administrativa como a los entes locales."

De estos principios básicos se desprende la necesidad de impugnar las afirmaciones que pretenden transformar a las Autonomías en compartimentos estancos y a la municipal en una instancia básica, irreductible y opuesta a las primeras.

Es evidente que el poder público se distribuye entre entidades de distinto nivel y contenido, partiendo de la titularidad de la soberanía que le corresponde al Estado. Cada entidad tiene o debe tener su propio ámbito, pero éste debe armonizarse y no oponerse al vecino.

Cuando se ha vivido la vida municipal desde dentro, y no solamente desde el punto de vista doctrinal, se cae en la cuenta de que se emplea casi más tiempo en defender al municipio de las competencias que se le quieren atribuir que de las que se le quieren quitar.

Lo que podría llamarse las competencias municipales por endose han sido y siguen siendo un problema municipal. Las Leyes sectoriales atribuyen a los municipios competencias que no suponen un poder real de decisión en esos asuntos, sino que representan funciones auxiliares que contribuyen poco a que los municipios se sientan identificados con sus problemas y necesidades. ¿Quién tiene que asumir el servicio de depósito de detenidos a disposición judicial cuando no hay establecimiento penitenciario? ¿Quién está obligado a gastos de inversión y mantenimiento en el sector educativo básico? ¿Quién tiene que ceder a su personal para que desempeñe las tareas de Secretario del Juzgado de Paz?

¿Acaso todas estas pretendidas competencias municipales refuerzan la capacidad de decisión municipal? Evidentemente, no. Sin embargo, es obvio que la autonomía municipal o cualquiera otra no puede concebirse como un compartimento cerrado, y si no se concibe como un compartimento estanco la gestión de muchos servicios ha de ser compartida, pues de lo contrario se iría a una multiplicación de la burocracia en paralelo con una ineficacia creciente. La relación entre las Comunidades Autónomas pluriprovinciales y las Diputaciones detecta esta necesidad de co-gestión en la *cosa pública*.

Los conceptos de autonomía y solidaridad están íntimamente implicados. Si nuestros problemas y necesidades no se llevasen hacia organizaciones solidarias no existiría más que el individuo y la autonomía individual. Las competencias de las distintas Administracio-

nes Públicas para la gestión del interés general son, en un muy alto porcentaje, competencias concurrentes. Así lo ha entendido la nueva Ley de Régimen Local, que muestra en su artículo 2.1 una grave preocupación al respecto y ordena a la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas que aseguren a los municipios, en los distintos sectores de acción pública, su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente a sus intereses; pero, por otra parte, en su artículo 7 empuja a los municipios a ejercer sus competencias propias atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.

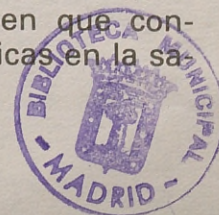
La realidad y los problemas son cada vez más globales y los individuos, en consecuencia, más interdependientes. En este contexto, y no en el romántico de Tocqueville, que decía que el Municipio había nacido de las manos de Dios, es donde hay que situar la autonomía municipal. No se trata de dilucidar ese sexo de los ángeles que consiste en saber si el municipio es una entidad natural o legal. Se trata de tener muy presente que el mismo ciudadano y vecino es quien elige sus representantes en el municipio, la provincia, la Comunidad Autónoma y el Estado. Y que, por tanto, todos estos representantes están igualmente legitimados para trabajar, en sus respectivos ambientes territoriales, por el bienestar de sus electores. Y que siendo única su fuente de legitimación, ese trabajo no puede ser desarrollado con mentalidad patrimonialista.

Por ello es esencial que esas Leyes básicas previstas constitucionalmente (que son las que adscribirán las competencias) sepan ponderar las virtudes de los diferentes sujetos públicos y encomendarles el poder de decisión preciso en un armonioso y equilibrado juego de concurrencias. En este sentido podrían indicarse tres principios:

1º Los municipios no deben convertirse en residencia de las competencias que no tienen encaje en otras instancias públicas.

2º Los municipios deben tener poder de disposición en los servicios públicos prestados localizadamente por otras instancias públicas, especialmente en lo que respecta al control de la calidad de las prestaciones.

3º En el ejercicio de las competencias, los representantes municipales saben que concurren con otras instancias públicas en la sa-



tisfacción de un mismo interés general que, por propia definición, es indivisible.

Por supuesto que estos postulados no podrán tener su plasmación en la legislación estatal si no se ha resuelto previamente la cuestión de la financiación de las Haciendas Locales. Pero ya el Gobierno ha declarado que en muy breve plazo va a quedar enfocado el esquema básico de los ingresos públicos municipales. Sobre esa base, es lícito ser optimista; es incluso razonable pensar que el legislador estatal va a proceder a una equilibrada distribución de competencias, basada en una racional organización y distribución de los recursos financieros.

Y no es casualidad que estas palabras sean pronunciadas por un Presidente de Comunidad Autónoma. Las Comunidades y los municipios van de la mano. Ambas instancias públicas oyeron al mismo tiempo la declaración constitucional de su autonomía y la convocatoria para concurrir en el nuevo modelo de organización territorial del Estado. Ambas han sido retadas por la Constitución a desarrollar de un modo armonioso y conjuntado sus funciones. Ambas tienen la naturaleza de instancias intermedias que actúan con cauces de participación del individuo.

Pero hay más, las Comunidades Autónomas tenemos que resolver positivamente ese complejo entramado de relaciones que nos han de unir a los municipios y las provincias con un sentido de cooperación. En muchos servicios los Ayuntamientos son ya las mejores "terminales" para todas las Administraciones Públicas. Debemos entenderlo así, sin reticencias, con generosidad y, sobre todo, con racionalidad. Esa cooperación va a exigir, mejor temprano que tarde, un esfuerzo financiero de las Comunidades Autónomas. Algo hemos hecho desde la Comunidad de Madrid en esa dirección. La creación de un nuevo capital social, la selección de proyectos de inversión debe plantearse también dentro de las Comunidades Autónomas, desde esta óptica de mutua cooperación.

Desde la constatación de un municipalismo vivo y actuante, desde la común ilusión en la profundización de la democracia española, les reitero, en nombre de la Comunidad Autónoma de Madrid, los mejores deseos de éxito en esta Tercera Asamblea, a la vez que espero tengan una agradable estancia en este Madrid, hoy más que nunca, abierto a todos.

Muchas gracias.



Ayuntamiento de Madrid

